

Bogotá D.C., 02 de mayo de 2025

CONCEJO DE BOGOTÁ 03-05-2025 10:22:30
2025ER11457 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: ETB/CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION N° 544 DE 2025
OBS: —

DPS-059-2025
CECO: S2023

Doctora

LUZ ANGÉLICA VIZCAÍNO SOLANO
Secretaria General de Organismo de Control
CONCEJO DE BOGOTÁ

Dirección: Calle 36 No. 28A-41

E-mail: secretariageneral@concejobogota.gov.co; comisiondegobierno@concejobogota.gov.co;
correspondencia@concejobogota.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta a Radicado No. 2025EE7991 O1 - Proposición No. 544 de 2025 – Aditiva de la Proposición 532 de 2025 – y a Radicado No. 2025EE8030 O1 – Citación a sesión de debate de control político del 06 de mayo de 2025.

Respetada Doctora Vizcaíno,

En relación con las comunicaciones del asunto, la primera, relacionada con dar respuesta a la **Proposición No. 544 de 2025** (aprobada el 25 de abril en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y trasladada a la Secretaría General), **Aditiva de la Proposición No. 532 de 2025** (aprobada en la sesión plenaria llevada a cabo el 23 de abril de 2025), cuyo tema corresponde a **“Derechos laborales y modelos de tercerización de la Administración Distrital en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”**, presentada por los **Concejales Ana Teresa Bernal Montañez y José Cuesta Novoa de la Bancada del Partido Colombia Humana del Concejo de Bogotá**, y la segunda, relativa a la citación a la sesión plenaria de debate de control político correspondiente a dichas proposiciones, que se llevará a cabo el 06 de mayo de 2025, por delegación expresa y a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. (en adelante ETB), amablemente damos respuesta en los siguientes términos:

ETB S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos clasificada como entidad descentralizada del Distrito Capital, organizada en forma de sociedad comercial por acciones, vinculada a la Secretaría del Hábitat, con patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, sujeta a la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de derecho privado, lo anterior de conformidad con los artículos 55 de Ley 1341 de 2009, 4° y 17° de la Ley 142 de 1994, aplicables por remisión expresa del inciso 3° del artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, así como, por el 3° del Acuerdo 643 de 2016 y lo reconocido por la Honorable Corte Constitucional en sentencias C-736 de 2007 y T-181 de 2014. Siendo importante precisar en este punto que, ETB S.A. E.S.P. es una empresa prestadora de los servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, la cual regula lo relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, norma que establece conforme se señaló anteriormente, los precisos eventos en que la Ley 142 de 1994 le resulta aplicable a empresas prestadoras del servicio de telefonía y tecnología como ETB S.A. E.S.P.

Así, conforme a lo dispuesto en el **artículo 55 de la Ley 1341 de 2009**¹ (norma especial que regula el sector de las telecomunicaciones), según el cual *“Los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado”* (se subraya), **el régimen jurídico de los operadores de telecomunicaciones, como es el caso de ETB, es el de derecho privado**. Por lo tanto, ETB es sujeto de inspección, vigilancia y control en las diferentes materias, por parte de las entidades competentes para cumplir tales funciones en relación con la Ley 1341, y las demás que vigilan el actuar de las empresas regidas por el derecho privado.

En materia específica de regulación de telecomunicaciones, el Legislador, a través de la Ley 1341 de 2009, le confirió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC- la función de regular la prestación del servicio. Por tanto, la actividad de ETB como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST-, se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria expedida por dichas entidades, y en esa medida, se aclara que son el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC- y la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, en el marco de sus competencias, las autoridades que ejercen las funciones de inspección, vigilancia y control de los PRST.

Así las cosas, si bien el inciso primero del artículo 54 -*Funcionarios Sujetos a Citación*- del Acuerdo Distrital 741 de 2019 *“Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”*, establece que en cumplimiento de la función de control político el Concejo de Bogotá podrá citar, entre otros, a los Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas, y si bien ETB es una entidad descentralizada indirecta del Distrito Capital de Bogotá (dada su vinculación especial al Sector Administrativo de Coordinación de Hábitat, conforme al artículo 3 del Acuerdo Distrital 643 de 2016), igualmente, debemos indicar que **ETB cuenta con una naturaleza jurídica especial**, al ser una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad comercial por acciones, que en desarrollo de su objeto social ejerce una actividad comercial dentro de un mercado en competencia en su calidad de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST, **conforme a las normas del derecho privado**, que no cumple gestión pública, ni se encuentra sujeta al régimen de la función pública, no actúa como una autoridad administrativa, ni tiene a su cargo el diseño, liderazgo, promoción y desarrollo de políticas públicas, ni de programas o proyectos de igual índole, no hace parte del presupuesto público, es decir, su operación no se encuentra sujeta a algún tipo de régimen público, pues ETB no ejerce el *“imperium”* propio de las entidades del Estado. En tal sentido, mediante **sentencia C-736 de 2007**, la Corte Constitucional definió que las empresas de servicios públicos mixtas son entidades con naturaleza jurídica y régimen jurídico especiales.

Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la función de control especial del Concejo de Bogotá en relación con las empresas prestadoras de servicios públicos, resulta oportuno realizar la siguiente aclaración, si bien el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que el ejercicio del control político por parte del Concejo lo desempeña a través de (i) citaciones para que los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al Contralor comparezcan ante el Concejo y respondan a un cuestionario previamente escrito; (ii) solicitud de información escrita a

¹ “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

07-07-7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

determinadas autoridades municipales, sobre el ejercicio de su cargo; y (iii) por medio de la moción de observaciones; lo anterior fue modificado con la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, la cual al regular esta materia, estableció que esta facultad del Concejo se limitaba a los representantes legales de empresas de servicios públicos domiciliarios sean públicos o privados.

Lo anterior, encuentra asidero al tener en cuenta que en lo no regulado por el Decreto 1421 de 1993 para funcionamiento y organización del Distrito Capital de Bogotá se aplica el régimen de municipios, es decir, la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, la cual expresamente señaló que es atribución del Concejo citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito, estipulando a renglón seguido, que la empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Ahora, el artículo 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019, modificado por el artículo 11 del Acuerdo 837 de 2022, en su inciso segundo prevé que: *“Así mismo, se podrá citar a control especial a los Representantes Legales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1551 de 2012”*²; al respecto, es necesario aclarar que **a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 (modificada por la Ley 1978 de 2019), la categoría de servicios domiciliarios de telecomunicaciones fue excluida del ordenamiento jurídico (los servicios de telecomunicaciones no son servicios públicos domiciliarios, ni estamos vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)**. En efecto, conforme al artículo 73 *-vigencias y derogatorias-* de la Ley 1341 de 2009, las empresas que venían prestando servicios de telecomunicaciones con sujeción a lo establecido en la ley 142 de 1994, quedaron excluidas de la aplicación del régimen de la citada ley 142, y cobijadas por la Ley 1341, siendo un marco jurídico especial que prevalece sobre cualquier otra norma de tipo general. Teniendo en cuenta lo anterior, **al no ser ETB una empresa de servicios públicos domiciliarios, esta compañía no puede ser sujeto del control especial previsto en la ley 1551 de 2012, ni del artículo 54 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá** y, por consiguiente, la empresa no puede ser destinataria de proposiciones del Concejo de Bogotá, ni objeto de citaciones a sesiones de debates de control político de dicha Corporación.

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente tener en cuenta respecto al ejercicio de la función de control político, que mediante la **Sentencia T-181 de 2014** la Corte Constitucional señaló que dicho control *“no se enmarca dentro de los fines constitucionales enunciados anteriormente, puesto que, no es el caso de un control fiscal que ampara un fin tributario, ni un control que persiga un fin judicial, ni mucho menos el ejercicio de un control de inspección, vigilancia e intervención propio del cumplimiento de las funciones de las Superintendencias frente a las empresas que prestan servicios públicos”* (se subraya). De tal manera, el espíritu de esta decisión judicial es el de reconocer que son las entidades que cuentan con las competencias constitucional y legalmente establecidas, las que se encuentran facultadas para cumplir con tales funciones de vigilancia y control.

² Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito.
07-07-7-F-020-v.8

Acá es importante resaltar lo mencionado por la Corte Constitucional, en la misma sentencia, frente al control político sobre la ETB, el cual se adelantará sobre los documentos o informes que presenta al público como todas las sociedades comerciales y, sobre los documentos que pueden ser solicitados a las autoridades competentes en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y auditoría. Así mismo, se podrá adelantar frente a los accionistas o miembros de junta de la entidad que estén sujetos al control político bajo el artículo 14 y 15 de la ley 1421 de 1993.

De otra parte, no puede perderse de vista que ETB desarrolla su objeto social y actividad comercial en el mercado altamente competitivo del sector de las telecomunicaciones, en el que como sociedad comercial requiere desenvolverse en un plano de igualdad frente a sus competidores; lo anterior, amparado a su vez en la libre competencia económica como derecho de rango constitucional, que conforme al artículo 333 de la Constitución Política de 1991, debe ser garantizado y no ser objeto de restricciones.

Lo anterior, se refleja, por ejemplo, en el amparo legal de la reserva³ de la información confidencial, sensible, estratégica y del secreto comercial de ETB, que se encuentra sometida a reserva mercantil, pues se refiere a aquellas actividades desarrolladas por ETB que resultan equiparables a las de sus competidores, las cuales son desplegadas dentro de un mercado en el que es necesario competir en igualdad de condiciones⁴; y, conforme a lo previsto en la Ley, es deber de los administradores de la sociedad proteger la reserva comercial y abstenerse de revelar la información de naturaleza confidencial de la misma.

Por tanto, las estrategias y criterios de negocios de ETB son protegidos, de la misma manera como se protegen los secretos industriales y comerciales de otras empresas, para impedir que, con su acceso, se pueda afectar el ejercicio de las libertades económicas. Al proteger la información, se protege la actividad productiva, industrial o comercial, referida a la naturaleza, las características o finalidades de los productos o servicios, los métodos, formas o procesos de distribución o comercialización de bienes o servicios y al manejo gerencial de la sociedad. El secreto goza de reserva y se traduce en información clasificada para otorgar al titular una ventaja en el mercado que le permite diferenciarse de sus competidores y ser más eficiente, con el fin de ser competitivo en el mercado.

Finalmente, teniendo en cuenta la temática de las Propositiones del asunto, que versa sobre asuntos laborales de entidades del distrito en el marco del Plan Distrital de Desarrollo, es importante aclarar lo siguiente:

1. El régimen de vinculación laboral de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST-, como ETB, es el de derecho privado, en virtud del régimen especial que como se indicó, es la Ley 1341 de 2009, el cual se materializa con la celebración

³ Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el artículo 61 del Código de Comercio, lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia T-181 de 2014 (de la cual ETB fue parte), y lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en trámites de insistencia presentados por Concejales de Bogotá, así como por jueces de la república en sede de tutela.

⁴ En el caso de las empresas de servicios públicos mixtas, la Corte Constitucional en la **Sentencia T-181 de 2014, en la que ETB fue parte**, consideró que “cuando se trate de documentos de carácter privado, contrario a lo dispuesto para el acceso a los documentos públicos, la regla general es la reserva, en tanto la ley no disponga excepcionalmente su exhibición o la expedición de copias”, y que son documentos privados que gozan de reserva “aquellos que sean originados del ejercicio de las funciones que realice la entidad, equiparables a las que realizan los particulares en un mercado donde se necesita que compita en igualdad de condiciones para la eficaz prestación del servicio”.

de contratos de trabajo entre la compañía y sus trabajadores, regidos por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo; en consecuencia, el régimen de contratación de personal de ETB no corresponde a la vinculación legal y reglamentaria de la función pública y el empleo público que se encuentra reglamentada en el Decreto 1083 de 2015, no siendo este último aplicable a la compañía.

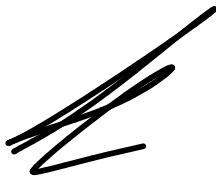
2. En virtud del Decreto Distrital N°. 714 de 1996 se compilaron las reglas que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, y dentro de las categorías de entidades previstas en el artículo 2 “*De la Cobertura del Estatuto*”, no se encuentra alguna que corresponda a la naturaleza jurídica especial de ETB y, por consiguiente, tal estatuto no resulta aplicable a esta compañía.

Además, por su especial naturaleza jurídica de Empresa Mixta de Servicios Públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, y por su régimen de derecho privado, no es aplicable a ETB la normativa relativa al presupuesto Distrital. Así las cosas, ETB, por tratarse de una sociedad comercial, con un objeto social que le permite ser autosuficiente y sostenible, **no hace parte del presupuesto territorial, no recibe dineros del presupuesto público, ni ejecuta presupuesto de tal naturaleza**. La empresa atiende su operación y su actividad conforme a los ingresos operacionales y no operacionales producto del ejercicio de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, regulado íntegramente por la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. Cosa distinta es la composición accionaria de la compañía, pues si bien ETB cuenta con una composición accionaria mayoritariamente pública en cabeza del Distrito Capital, resulta necesario diferenciar y aclarar que el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital no le resulta aplicable a la empresa.

3. ETB no tiene a su cargo el cumplimiento de compromisos, metas o indicadores del Plan Distrital de Desarrollo, en la medida que no es una entidad que lidere o promueva políticas públicas o programas y proyectos públicos, como tampoco cumple gestión pública, ni funciones públicas, como ya se indicó.

Por todo lo expuesto, amablemente informamos que no le resulta aplicable a ETB dar respuesta al cuestionario de la Proposición 532 de 2025, ni asistir a la sesión de debate de control político del asunto.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Coordinador Asuntos Públicos y Sostenibilidad
Secretaría General y Asuntos Corporativos